

**NEOCONSERVADURISMO Y SECURITIZACIÓN EN LA AGENDA DE SEGURIDAD  
COLOMBIANA: 2018 - 2019**

MARIA CAMILA FLOREZ CONTRERAS - u7600343@unimilitar.edu.co

LAURA VALENTINA PEDRAZA TORRES - u7600385@unimilitar.edu.co

SARAH HENNIG PEREA - u7600349@unimilitar.edu.co

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA - CAMPUS

PREVENCIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO.

CAJICÁ, COLOMBIA

Trabajo preparado para su presentación en el X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas (ALACIP), en coordinación con la Asociación Mexicana de Ciencia Políticas (AMECIP), organizado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), los días 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto 2019.

## **RESUMEN**

El objetivo de esta ponencia es dar cuenta de los principales elementos que definen al ideario neoconservador y su adecuación dentro del contexto colombiano y las maneras como este sistema de ideas se articula con los procesos de definición de las agendas de seguridad del gobierno actual en Colombia, sobre todo en materia de percepción de las dinámicas de conflicto armado y frente a las víctimas.

Para dar cuenta de este objetivo, la ponencia se estructura de la siguiente manera que da cuenta de los elementos a tratar en ella: primero se desplegarán los principales elementos teóricos que nos pueden permitir entender qué es el ideario neoconservador, para lo cual serán claves autores como Ayerbe (2014) y Thompson (2007), además de que se intentará presentar cómo este ideario terminan por entretrejer, por lo menos de manera parcial, una plataforma ideológica con la capacidad de dar sentido a buena parte de las acciones y decisiones en materia de seguridad, por parte de los definidores de política pública en gobiernos afines a este ideario.

En segundo lugar, la ponencia mostrará algunos elementos de análisis, en clave de securitización, que pueden servir para mostrar cómo en el escenario actual del gobierno colombiano, muchas de sus posturas en materia de seguridad, referidas principalmente a la manera cómo entienden a los actores del conflicto armado y a las víctimas, pueden estar permeadas por el ideario neoconservador, de tal manera que se le enuncie como enemigos de la población; para esto se echará mano de algunos aportes de Foucault (2005) en relación a sus conceptos de racismo y biopolítica.

Por último, se plantearán algunas líneas de debate en torno a cómo el despliegue del ideario neoconservador y su articulación con procesos de securitización en Colombia, pueden

suponer una serie de implicaciones complejas para entender cómo desde el Estado se asume la producción de la seguridad en Colombia.

En el orden de lo metodológico se realizará un análisis de tipo histórico hermenéutico, que tendrá en cuenta el marco teórico que se propone y los procesos políticos sociales pertinentes; teniendo como marco histórico el periodo entre 2018 y 2019.

**PALABRAS CLAVES:** neoconservadurismo, securitización, víctimas, conflicto armado, post acuerdo.

## **NEOCONSERVADURISMO Y SECURITIZACIÓN EN LA AGENDA DE SEGURIDAD COLOMBIANA: 2018 - 2019**

### **I. Neoconservadurismo, nacionalismo y América Latina.**

El ideario neoconservador tuvo sus orígenes en Estados Unidos, y es generalmente relacionado con el partido Republicano y con una visión agresiva de la política, la cual posteriormente se expandió a países de Europa (Reino Unido, República Checa, Alemania), Asia (Japón) y años después de forma parcial a América Latina.

Irving Kristol quien es considerado el fundador de este ideario en estados Unidos, plantea que no es un movimiento social o político sino “una perspectiva moral que se deriva de un amplio espectro de ideas, creencias, y sentimientos que informan la política, sin duda, pero también la cultura, la religión, la economía y mucho más” y tiene como objetivo “convertir el partido republicano, y el conservadurismo americano en general, contra sus voluntades respectivas, en un tipo nuevo de política conservadora apropiada a gobernar una democracia moderna” (Kristol, 2004,p. 33).

Lo anterior, permite mostrar que el ideario neoconservador, propone impactar todos los aspectos del individuo y de la sociedad, para generar un mayor control que atravesase lo político, económico, moral, social, cultural, etc. Esto se ve justificado, en los postulados que propone Kristol (2004) para este ideario, los cuales se basan en cuatro ideas fundamentales.

En primer lugar, habla del patriotismo como un sentimiento necesario que debe ser incentivado por las instituciones; en segundo lugar, se proclama en contra de un gobierno

mundial, pues genera tiranía y las instituciones internacionales que promuevan el ideal de un gobierno mundial, deberán ser establecidas como dudosas; en tercer lugar, es fundamental que aquel que se encuentre dirigiendo una nación, tenga la capacidad de distinguir muy bien sus amigos y sus enemigos. Por último, plantea que el interés nacional de una gran potencia no debe darse en términos geográficos.

Por consiguiente, los neocons (*contracción usada para referirse a los neoconservadores*), hacen uso de ciertas estrategias como la implementación de valores morales específicos y rígidos que permiten la normalización de la sociedad; la planeación de políticas internas y de política exterior que permita la reafirmación de la autoridad y preservar el statu quo determinado. Finalmente, proponen la delimitación del bienestar social, es decir, un mecanismo que identifica los grupos sociales que son aceptados dentro de la concepción de “lo nacional” y garantiza a estos la resolución de sus interés y necesidades, sin embargo, requiere de una responsabilidad individual, por lo tanto, no actúa como un Estado benefactor, sino como Estado Empresa, en el cual el ámbito privado y el mercado son el único modo de satisfacción de los requerimientos de la sociedad.

Lo anterior, se argumenta en la analítica del neoconservadurismo, de Samuel Huntington, en la cual plantea que al existir una amplia participación política en la que se tenga en cuenta a toda la sociedad, el Estado pierde la capacidad de suplir las necesidades, por lo tanto se debe limitar el sector poblacional al cual se le brindara protección, por medio de la despolitización de la política, es decir, limitando la capacidad de resolución de conflictos por parte del Estado, privatizando los servicios públicos. Rodrigo Contreras Osorio lo plantea de esta manera: “Así, lo político, al perder su capacidad de intervención en lo económico, se transforma en un sistema funcional autocentrado. Se asegura y se protege la estabilidad económica frente a los vaivenes políticos y las demandas sociales.”

La despolitización de la política, demanda por parte de los individuos un consumo para generar un control sobre la sociedad bajo un capitalismo democrático (San Martín, 2008), en el cual se propone un nuevo consenso sociopolítico y se da una articulación entre lo económico, político y cultural. Al existir ciertos patrones de comportamiento por parte de los individuos, incentivado por las instituciones estatales, se da lugar a la formación de una nación bajo unas delimitaciones establecidas por clase hegemónica, las cuales exacerbaban un sentimiento nacionalista.

Es este sentimiento el que permite el funcionamiento y a su vez es base del ideario neoconservador, debido a que el nacionalismo es el medio que usará para generar la selección de aquellos que serán considerados parte de la identidad nacional y por ende serán beneficiados por el Estado y el Mercado, dependiendo asimismo de su aporte individual. Generando entonces la división social, se excluye a quienes no serán protegidos por el Estado, debido a que representan una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad del orden socioeconómico. Esto es respaldado por Thompson, quien plantea que, a la luz de los discursos de los neocons, el bienestar general es superior a los derechos individuales, y por ello no defiende propiamente “derechos inalienables de la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad.” Sin embargo, desde el punto de vista del funcionamiento del ideario, lo anterior es una estrategia que permitirá ejercer un control social, puesto que, si se enfocase en los derechos individuales, irrumpirá con los planteamientos y los mecanismos de funcionamiento del Gobierno y por consiguiente de las clases hegemónicas.

El neoconservadurismo latinoamericano se articula con la herida colonial definido por Mignolo (2005) como “una consecuencia del racismo, el discurso hegemónico que pone en cuestión la humanidad de todos los que no pertenece del mismo *locus* de enunciación [...] quienes crean los parámetros de clasificación y se otorgan a sí mismos el derecho a clasificar.” puesto que impone una jerarquización del poder que quedó instaurada en el imaginario y el funcionamiento político actual. En Colombia se evidencia un nacionalismo promovido desde las elites atravesado por los patrones coloniales, descritos anteriormente.

Por lo tanto los neocons en Latinoamérica, específicamente en Colombia, ya no hacen uso de un nacionalismo fundado en la identidad nacional, sino un nacionalismo de élite, el cual promueve una división social, que plantea al buen ciudadano como aquel que aporta a la producción, legitima el poder de las élites y no hace parte de movimientos que promuevan la oposición, respeta la tradición y valores que devienen de la cultura capitalista en la cual se plantean postulados neoliberales, un crecimiento económico continuo, el rechazo al análisis crítico de los fenómenos políticos y socioeconómicos.

Promueve también, el individualismo neoliberal arraigado a los valores y moral implementados por las élites, generando asimismo un avance de la sociedad a partir de las acciones y aportes de cada individuo, y no bajo la doctrina de un crecimiento común. Lo anterior requiere un individuo autónomo y ambicioso frente a su condición económica y

social, insertado en una estructura que lo define como defensor de la familia, la religión institucional, y tradiciones que permitan que el capitalismo democrático perdure en el tiempo y mantenga una estabilidad de las instituciones estatales y su control sobre la población.

Así las cosas, definen al “mal” ciudadano como aquel que no es coherente en sus acciones frente a las tradiciones éticas, morales y religiosas; no aporta al crecimiento económico ni a la expansión del capitalismo, puesto que se encuentra en una etapa de estancamiento económico, evitando el progreso de la población y generando un cambio en los valores y tradiciones, convirtiéndose en una carga para el Estado, dado que necesita de su asistencia excesiva, a diferencia de los otros individuos que buscan su progreso individual, por lo que finalmente lleva al Estado a una crisis.

Por lo anterior, se genera una división dentro de la sociedad colombiana, en la cual el “nosotros” serían las elites y el “ellos” sería el pueblo que no progresa en la forma en que la clase hegemónica lo desea y bajo la normativa, tradiciones y valores que las instituciones estatales protegen. Así las cosas, Mouffe (1999) plantea en “El retorno de la política” que puede existir una dinámica de antagonismo o de agonismo, en el primer caso se evidencia la existencia de un enemigo que no merece el reconocimiento como igual, ni tolerancia de sus visiones políticas, económicas, sociales, etc., y en el segundo caso existe una disputa por la hegemonía, por medio de canales políticos legítimos, dando paso a una democracia, en la cual se tolera al adversario y se reconoce el derecho de concebir una perspectiva diferente, y se tiene en cuenta para la toma de decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, etc.

En Colombia, el modelo que se sigue es el antagonismo, debido a que el pueblo es visto como un enemigo, no es reconocido como un igual político, y tampoco tiene la capacidad de insertarse en la discusión política, puesto que sus intereses y necesidades no son tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones. De la misma manera, las élites excluyen al pueblo, para prevenir la ruptura del mecanismo de funcionamiento del neoconservadurismo, que buscará mantener un statu quo, por medio de estrategias como el racismo de Estado y la biopolítica, las cuales generan un control total de los ámbitos de la vida de los sujetos y de la sociedad, permitiendo mantener, y en algunos casos aumentar, el poder económico y político de las élites, así como su impacto social y cultural.

## **II. Conflicto Armado Colombiano.**

Las tradiciones políticas que han venido configurando el Estado en Colombia, han generado un conflicto político, económico, social y cultural, lo cual acabará por hacer parte fundamental de la agenda política colombiana, debido a la patrimonialización de la política, definida como el proceso de cooptación del Estado por parte de las élites colombianas, con el fin de capturar la democracia y establecer instituciones estatales que sustenten su poder político y económico en la sociedad.

Para comprender el funcionamiento del sistema político colombiano y el manejo que se le brinda al reconocimiento de las víctimas por parte del Estado y de los Grupos insurgentes, es necesario realizar una contextualización del conflicto armado, comenzando desde el origen de las tensiones políticas en Colombia hasta la actualidad.

- **Violencia Bipartidista (1958-1982)**

En el libro *Basta Ya Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad* del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), se plantea que el conflicto interno surge debido a la inequidad social, política y económica y los intentos fallidos de redistribución de la tierra, que se generaron por la disputa del poder entre los partidos tradicionales (conservadores y liberales) y tuvo como consecuencia la violencia por parte de los partidos políticos entre sí, reflejada en las agrupaciones armadas hacia sus adversarios (Policía Chulavita - Guerrillas Liberales) y el surgimiento de movimientos revolucionarios por parte de la población inconforme frente a un espectro político que carecía de variedad. Todo esto tuvo su cúspide en las protestas populares y la violencia desatada en el Bogotazo, donde se pretendía por parte del Estado, eliminar el cuerpo social inconforme representado en el candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán del partido liberal, quien fue asesinado el 9 de abril de 1948.

Debido al impacto social y político que tuvo la muerte de Gaitán, el pueblo colombiano que se encontraba en desacuerdo con el manejo del Estado hacia la población, configuró movimientos revolucionarios por parte de los campesinos denominados autodefensas, las cuales tenían como objetivo enfrentar y detener el proceso de opresión y dominio de las

élites políticas frente a los ciudadanos, para permitir a nuevos actores con nuevas perspectivas hacer parte de la política colombiana.

Por lo anterior, el Estado quiso generar una transición política que pusiera fin a la violencia, por medio de la Dictadura de Rojas Pinilla, esto no tuvo el éxito esperado puesto que dichos grupos decidieron seguir luchando por una participación política, ya que la mayoría de las zonas en las que se asentaban estaban desprotegidas por el Estado, por lo cual conformaron unas Repúblicas Independientes como la República de Marquetalia.

A raíz de ello, Rojas Pinilla desplegó operativos militares para contener los movimientos campesinos de Sumapaz y el oriente del Tolima, lo cual generó una transformación de las autodefensas a guerrillas revolucionarias, debido a la necesidad de los movimientos de buscar la defensa frente al Estado opresor.

A partir de la represión oficial, y la minimización de las posiciones políticas moderadas, los grupos insurgentes toman la justicia por las manos ya que desde su perspectiva evidencian que la única manera de acceder a la participación política es por medio de la violencia y la adquisición de territorio del país, puesto que la tenencia de la tierra en Colombia significa poder político, necesario para acceder al poder y generar cambios en el sistema político. Los territorios en donde se asentaron principalmente fueron Tequendama, Sumapaz, Sur del Tolima, Ariari, Caquetá y El Magdalena Medio, gracias al apoyo que las comunidades campesinas, desprotegidas por el Estado. Debido al control de las guerrillas, mucha población campesina vio la necesidad de desplazarse hacia el centro del país, en busca de seguridad y prosperidad económica, ya que sus tierras habían sido captadas.

- Expansión de las Guerrillas y el narcotráfico (1982-1996)

Esta etapa se caracteriza por la dominación de las guerrillas revolucionarias colombianas frente a gran parte del territorio y la búsqueda de posicionamiento político por parte de estas. Con el fin de alcanzar el poder las guerrillas revolucionarias, entre ellas las FARC, ponen en práctica estrategias de presión contra el Estado Colombiano, como lo fueron los secuestros, extorsiones, masacres, torturas, entre otros vejámenes contra los derechos humanos. Todos estos sucesos causaron en Colombia una polarización política y social, y una obstrucción de



la libertad de circulación por parte de los civiles, así como un sentimiento de miedo en toda la población hacia el Estado y las guerrillas.

A mediados de los años 80, a raíz de la revolución y las guerrillas, surge una contrarrevolución armada configurada por los paramilitares, quienes inicialmente buscaban proteger a la población campesina del control de los guerrilleros, fue así como regiones en las que antes imperaba la subversión, como Urabá y el Magdalena Medio, pasaron a ser 'territorios liberados' por los grupos de autodefensa o paramilitares. Sin embargo, esto aumentó las cifras de desplazados hacia la capital, quienes se veían en la necesidad de huir de su territorio por falta de seguridad y miedo.

Bajo la necesidad de encontrar un financiamiento para combatir, los grupos insurgentes y los paramilitares generan un vínculo con uno de los fenómenos que se encontraba en auge en el momento: el narcotráfico. Asimismo, tanto las élites políticas colombianas como algunas instituciones estatales fueron permeadas por el narcotráfico, con el fin de proteger su patrimonio - la política- lo cual llevó a la consolidación de narcopolítica para luego generar una parapolítica.

Todo ello, causó la impregnación de una cultura del narcotráfico, donde los ciudadanos se veían inmiscuidos en una sociedad basada en el dinero fácil y el ascenso social rápido, provocando una pérdida de la moral individual y de la comunidad. Por ello, se puede evidenciar el uso del narcotráfico en el financiamiento paramilitar, para adquirir territorios con el fin de aumentar la influencia política y direccionar la participación política en las elecciones presidenciales a realizar en el 2002.

A raíz de la búsqueda de cambio en el sistema político, se logra la instauración de la Constitución Política de 1991, la cual garantiza derechos fundamentales para los ciudadanos, y asegura la participación política. De igual forma, con el ánimo de buscar justicia, se iniciaron los intentos de negociación con las guerrillas revolucionarias, por parte de varios presidentes como Betancur (1984), Barco (1986), Gaviria (1990), Samper (1994) y Pastrana (1998). Los intentos fueron fallidos, debido a la falta de compromiso por parte de los grupos insurgentes desmotivados por las propuestas y acuerdos planteados por el Estado Colombiano.

- Uribe (2002-2010)

A partir de la recuperación de territorio por parte de los paramilitares, la influencia política de los mismos en la población civil y la necesidad del pueblo colombiano de ponerle un fin a la violencia y el control de las FARC en el territorio, Uribe logra ganar las elecciones presidenciales en el año 2002.

Uribe puso en práctica un plan internacional, para buscar la reconceptualización de la guerrilla en Colombia, por medio de la apropiación del concepto de terrorismo a partir del suceso del 11 de septiembre, lo cual le permitió que el Sistema Internacional, categorizara a las FARC como amenaza terrorista. Gracias a ello, recibió apoyo económico y militar, especialmente por parte de Estados Unidos, quien justamente iniciaba su guerra contra el terrorismo. Todo esto, llevó a Uribe a recuperar el territorio colombiano, previamente dominado por las FARC.

Este proceso se llevó a cabo por medio de la Seguridad Democrática, implementada bajo los mismos lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional que se originó en el contexto de la Guerra Fría, impulsada por Estados Unidos. Gracias a dicha política de Estado, bajó la inseguridad en Colombia. En primer lugar, según el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión de Colombia, en los primeros 6 meses de su mandato los secuestros se redujeron en un 96%. En segundo lugar, Uribe logró recuperar 411 municipios que se encontraban bajo el poder de las FARC, por medio del fortalecimiento militar, con el apoyo económico de Estados Unidos y en tercer lugar se redujeron a 42.000 hectáreas los cultivos de coca, por medio de la fumigación aérea.

En su segundo gobierno (2006-2009), las políticas se centraron en primer lugar en continuar con la implementación de la Seguridad Democrática para reducir el territorio y capacidad de acción de los grupos insurgentes, y en segundo lugar se enfocó en la Prosperidad Democrática, la cual consistió en mejorar la economía de Colombia e incrementar tanto el PIB (Producto Interno Bruto) como el PIB per cápita.

Lo anterior se llevó a cabo por medio de la transformación de la imagen de Colombia hacia el Sistema Internacional, permitiendo que se identificara como un país más seguro con respecto a los periodos anteriores de violencia, aquello dio paso al aumento de inversión

extranjera en Colombia. Durante su administración logró aumentar la inversión extranjera y un crecimiento de la economía, para el año 2002 la inversión extranjera representaba el 2.134 Millones de dólares del PIB, y para el final del mandato de Uribe (2009), representaba el 7.201 Millones de dólares del PIB de Colombia.

Así las cosas, las estrategias que soportaron las políticas de ambos periodos presidenciales de Álvaro Uribe fueron la utilización de una cadena de equivalencias y la reconceptualización de un significativo vacío. La primera consistió en la creación de una percepción de seguridad basada en Uribe, en la que la cultura política del país se configura hacia la permanencia del mandatario en el poder, con el fin de salvaguardar sus derechos y la seguridad de la población; así mismo se realizó una redefinición del buen ciudadano colombiano (significante vacío), identificado por su lealtad hacia el gobierno uribista, y el respeto hacia los valores que este pretendía imponer, como sería el conservadurismo, la religión católica, la familia en su forma tradicional, la confianza plena en las posiciones políticas del mandatario, sin la reflexión y el análisis individual hacia las necesidades del pueblo. Todo aquello catálogos y clasificó a la población colombiana bajo unos estándares de comportamiento, que permitieron la aprehensión y represión de aquellos ciudadanos que no compartían las mismas visiones políticas, económicas, sociales, etc.

Por ello, se llevaron a cabo estrategias de control basadas en la eliminación de opositores a su gobierno. Estas estrategias se implementaron por un lado con vías armadas, en las cuales se crearon grupos armados organizados paralelos al gobierno llamados paramilitares, quienes se encargaban de reducir el número de combatientes guerrilleros y de forma discreta a las persona que fueran en contra de las políticas de gobierno o del modelo de buen ciudadano. Las estadísticas presentadas al Sistema Internacional que mostraban las bajas que se dieron a dichos combatientes, fueron la carta de presentación para aumentar la inversión y la confiabilidad en el país.

Por otro lado, se eliminaban los opositores de forma indirecta, por medio de la supresión a los ciudadanos que buscaban diferentes alternativas de gobierno, como fueron el campesinado, los desplazados, los indígenas, las zonas del país que no tenían presencia del gobierno, entre otros. De este modo, sus *inputs* (*peticiones*) al sistema político eran ignoradas o en su defecto rechazadas por la elite política y debido a la patrimonialización de la política colombiana. Esto se evidencia en casos como las protestas de los indígenas, los

campesinos y todos los sectores excluidos ya sea social, política, o económicamente. Permitiendo así el posicionamiento del gobierno de forma prolongada e impuesta.

- Santos (2010 - 2018)

El prospecto que se tenía para el gobierno de Juan Manuel Santos era continuar con las políticas de gobierno de Uribe, manteniendo como foco fundamental la Seguridad Democrática y hacer frente a los grupos insurgentes de forma armada. Sin embargo, poco después de su posesión, Santos le dio un giro a la política del país, puesto que continuó con la protección a la seguridad por medios diplomáticos y de negociación, por ello planteó la propuesta de un proceso de paz con el grupo insurgente más representativo del conflicto armado: las FARC.

Sus planteamientos básicos fueron Prosperidad para Todos y Todos por un Nuevo País, lo cual generaba un ambiente distinto en la cultura política del país, un cambio en torno a la forma de terminar con el conflicto armado: alejarse de las armas y buscar la paz con ayuda internacional. Así las cosas, el proceso de paz comenzó con las negociaciones entre las FARC y el Estado Colombiano en diciembre del 2012 en la Habana, Cuba y bajo el apoyo de diferentes actores internacionales como Noruega, Chile y la ONU.

A partir de ello, se fijaron varios frentes que debían debatirse para definir su situación a partir del proceso de paz, entre ellos se encuentran, el acuerdo agrario, el acuerdo de drogas ilícitas, el acuerdo de participación política, el acuerdo sobre las víctimas y el acuerdo del fin del conflicto. El objetivo de este acuerdo es reconocer a las víctimas del conflicto armado por medio de la restitución de sus tierras para cultivar y mejorando la infraestructura rural y desarrollo social; brindarle participación política a los grupos de oposición y las víctimas de una forma segura, reducir el número de cultivos ilícitos e investigar y judicializar a aquellos que estén ligadas con el narcotráfico y quienes fueron responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto por medio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, asegurando así la rendición de cuentas para las víctimas.

Para la planeación, diálogo y negociación del Acuerdo de Paz fue necesario cambiar nuevamente la imagen internacional de Colombia, con dicho objetivo en mente se propuso mejorar las relaciones internacionales del país y posicionar a Colombia de mejor manera

frente a potencias económicas y políticas como Estados Unidos. En primer lugar, reanudó las relaciones diplomáticas con varios países, estableciendo embajadas en 7 Estados; aquello se dio para demostrar que Colombia estaba dispuesta a cooperar y enfocarse en medios pacíficos para solucionar su conflicto interno.

En segundo lugar, se enfocó en promocionar los productos representativos de Colombia promoviendo oficinas de Proexport (25 oficinas actualmente). Buscando con ello, ser competitivo en el panorama externo, coordinando, articulando y diversificando la economía del país frente al comercio internacional. Asimismo, quiso generar una transición económica, para hacer parte de una organización económica como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la cual posee alto reconocimiento a nivel internacional y proporciona unos estándares de negociación que brindan seguridad para los procesos económicos.

Finalmente, considerando que Colombia tiene gran capacidad estratégica a nivel militar, buscó generar con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) una asociación a nivel geoestratégico, que brindó al país un estatus de socio global, hecho que implica el intercambio de información, tácticas, capacitación, entre otros, con los países miembro de la OTAN.

Así las cosas, se propone un nuevo ambiente político y social para Colombia, puesto que la incorporación en el Sistema Internacional era elemental para monitorear el Acuerdo, desde organizaciones internacionales como la ONU, hasta mandatarios como Barack Obama y el Papa Francisco. De este modo, el Acuerdo de Paz constituyó un paso esencial para cambiar el espectro político, la seguridad de los ciudadanos y para darle un giro a la historia de Colombia, y fue fundamental para pasar de una lucha armada a una discusión política, en la cual salieran a la luz los problemas base de Colombia, por los cuales el conflicto comenzó en primer lugar; aquellos como la injusticia, la corrupción y la falta de una democracia sólida, entre otros.

Por ello, cuando llegó el paso de la aprobación por parte de los colombianos, existieron luchas entre distintas posiciones políticas que buscaban darle un giro completo a la situación y aquellos que deseaban continuar, y a partir de la carencia de la difusión próspera del Acuerdo y sus puntos, la sociedad Colombiana voto “no” al acuerdo en el plebiscito que

solicitaba aprobación. Situación que, frente al Sistema internacional, planteó a Colombia como el país que no estaba dispuesto a aceptar la paz, visto desde una visión general de la situación.

Las zonas más afectadas por el conflicto votaron "sí" y las zonas que más disfrutaban de las posiciones políticas de mandatarios neoconservadores ganaron con el "no" a la paz, evitando una vez más que las víctimas, quienes han tenido que seguir en silencio, comuniquen sus necesidades de un cambio profundo en la forma que se lleva la política. Falta de información, falta de democratización, la patrimonialización de la política, la tenencia de las tierras, los obstáculos para el desarrollo de estas clases, la manipulación electoral y las promesas vacías no han permitido que aquellos que sostienen la agricultura del país, y aquellos que han sufrido todas las consecuencias del conflicto sean escuchados y reparados justamente.

Sin embargo, el acuerdo se puso en práctica por parte del gobierno, debido a que este lo visualizaba como fundamental para comenzar con un direccionamiento más próspero. Esto causó polarización en la política Colombiana, teniendo en cuenta que lo que se reconoce hoy como el lado neoconservador de la política (liderado por Álvaro Uribe), se pronunció en contra de varios puntos del Acuerdo, mientras que la oposición se consideró a favor, identificando ciertos puntos que podían evaluarse y mejorarse, no obstante, dispuestas a continuar.

A partir de ello las críticas hacia el Acuerdo se basan en la falta de recursos para ponerlo en práctica, teniendo en cuenta que la economía de Colombia no está en las capacidades para hacerlo; la falta de compromiso y monitoreo de la restitución de tierras y el redireccionamiento de los cultivos ilegales a cultivos legales, en vista de que los métodos utilizados aumentaron los cultivos ilícitos. Aquello en vista de que muchos agricultores con cultivos legales reemplazaron por un periodo de tiempo sus cultivos al de drogas ilícitas para recibir remuneración del gobierno y volver al cultivo lícito, o si bien, mantenerse en el cultivo ilícito debido a su enriquecimiento.

Así mismo, el espectro político, que demuestra la fuerte capacidad de corrupción para la manipulación de instituciones, genera desconfianza en la elección de los magistrados de la JEP, o en general en la capacidad de prosperidad e implementación del Acuerdo de Paz.

Situaciones como la impunidad, la conveniencia política, entre otros, le presenta a la sociedad colombiana un obstáculo para llegar a la paz y finalmente para comenzar un crecimiento social, político y económico.

### **III. Gobierno actual y su agenda de seguridad frente a las víctimas.**

En el escenario actual del gobierno colombiano, las posturas en materia de seguridad según el PND (Plan Nacional de Desarrollo) están dirigidas hacia la construcción de un vínculo entre seguridad y justicia, con el fin de garantizar la ausencia de violencia, a través del discurso de la protección de los ciudadanos y la sociedad. El gobierno sustenta su discurso con el denominado círculo virtuoso de la seguridad, que busca una transformación estratégica por medio de la seguridad, la legalidad, el emprendimiento y la equidad, ya que engloba el campo social, económico, político y medioambiental.

Una de sus principales políticas va dirigida a la lucha en contra de la corrupción, ya que refleja una percepción negativa y desconfianza en la sociedad. Según el PND esta lucha ha estado fundamentada en el fortalecimiento del Estado implementando sanciones por asuntos relacionados a la corrupción.

Colombia enfrenta numerosos desafíos en materia de seguridad debido a la ausencia de instituciones estatales, como la prolongación de la violencia, la criminalidad, la multiplicación de los grupos de crimen organizado, las actividades de economías ilícitas, etc. Por ello, es importante resaltar que la agenda busca principalmente la protección y seguridad de los líderes sociales. Sin embargo, en este último año se ha evidenciado que, en vez de existir una disminución en las cifras, se han agravado los asesinatos a líderes sociales. Según Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) en su último informe, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019, 837 líderes sociales, defensores de Derechos humanos y ex combatientes de Farc fueron asesinados en toda Colombia.

Por otro lado, uno de los temas a resaltar en la agenda de seguridad es la Paz, ya que el gobierno colombiano sostiene que en una sociedad donde la seguridad y la justicia van de la mano lo esencial es la paz. Según el PND, todo ello implicaría el fortalecimiento del imperio de la ley y una serie de estrategias basadas en la cultura de la legalidad, con el fin de

garantizar la seguridad de los ciudadanos. Para ello, es necesaria la presencia del Estado en aquellos territorios con vacíos de autoridad.

A partir de estos elementos se puede hablar de uno de los puntos más importantes a tratar dirigidos hacia la atención y reparación de las víctimas. Según el PND, Colombia tiene alrededor de nueve millones de colombianos registrados como víctimas, producto del conflicto armado en el país. Así las cosas, el gobierno colombiano en su discurso, propone un acompañamiento, reparación, atención integral y la rehabilitación de los daños causados a aquellas personas, primando la seguridad para generar estabilidad. De igual manera, se enfatiza en la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que tiene una vigencia hasta 2021, con el fin de superar la situación de vulnerabilidad, aclarando que el 88% de las víctimas son desplazadas. Todo ello, con el objetivo de reducir la pobreza, reparar las víctimas, contribuir con la verdad y memoria, etc.

Dicho lo anterior, es importante enfatizar que el gobierno colombiano tiene el deber de cumplir con todas aquellas propuestas y estrategias que ha planteado para su agenda. Sin embargo, se ha evidenciado que la realidad es otra, ya que el gobierno colombiano ha demostrado que solo busca representación y para ello suprimen a aquellas personas que de alguna u otra manera están en contra de su gobierno.

Así las cosas, los anteriores gobiernos y el actual gobierno colombiano, han venido generando estrategias o prácticas de violencia, no solo hacia la sociedad civil, sino a aquellos miembros de la oposición política, especialmente los líderes sociales o en este caso las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, puesto que el gobierno colombiano las ve como una amenaza a sus intereses. Entre estas prácticas cabe resaltar los asesinatos a los líderes sociales, la exclusión hacia las víctimas, la segmentación de la sociedad, etc. Con el objetivo de eliminar, controlar y disciplinar a la sociedad en general. La realidad es que el gobierno busca legitimidad política, por medio de la represión y eliminación de cualquier participación política de la sociedad.

En cuanto a los líderes sociales es evidente que no se ha dado una disminución de las cifras de asesinados, sino al contrario cada vez hay más asesinatos. Además, el gobierno colombiano no ha cumplido con su palabra, puesto que los líderes sociales han sido personas que reclaman la paz y la continuidad de los acuerdos, desafiando el poder de las



élites. Pero detrás de todo ello, el ideario neoconservador usa el conflicto armado para justificar y ocultar este tipo de violencia. Por esta razón, los ve como enemigos, haciendo uso del “Nosotros y Ellos” dejando a ciertos grupos fuera de la securitización que plantea el gobierno.

De la misma manera pasa con las víctimas que ha dejado el conflicto armado, donde los neocons encasillan a estas personas como los enemigos de la población, haciendo uso de mecanismos de dominación, como lo es el racismo de Estado definido como “un racismo que una sociedad va a ejercer sobre sí misma, sobre sus propios elementos, sobre sus propios productos; un racismo interno, el de la purificación permanente, que será una de las dimensiones fundamentales de la normalización social” (Foucault M. , 1976). Así, el Estado Colombiano en su discurso se hará ver como un garante de la integridad, con el fin de mantenerse en el poder, de esta manera es evidente que el Estado colombiano busca aplicar estas técnicas, ya que el racismo se convirtió en el mecanismo del poder a través del cual, el Estado decide quién debe vivir y quién debe morir, para salvaguardar sus intereses.

El gobierno colombiano excluye a las víctimas haciendo uso del racismo de Estado generando una fragmentación y justificando la muerte o el abandono de ciertos grupos, buscando una normalización de la población. De una u otra forma al estado no le beneficia tener una población que reclama cada día más por presencia institucional, reparación, garantía de la justicia y presupuesto para que se hagan efectivas todas sus peticiones. Cabe mencionar que el racismo generado es un racismo en términos biológicos, pues entre más desaparezcan las razas inferiores, en este caso las víctimas, líderes sociales, excombatientes o aquella población que es vista como peligro para las élites - entendidas por el Estado como “anormales”- menos amenazas tendrán la sociedad, teniendo un control social internamente.

De esta forma, las víctimas son entendidas por parte del gobierno como un mal ciudadano, teniendo en cuenta que desde el ideario neoconservador, son ciudadanos cuyo estilo de vida no aporta al statu quo, debido a que el proyecto de nación no tuvo victoria sobre estos grupos y no le permite a la élites avanzar a la velocidad que desean y bajo lineamientos como el capitalismo, llevando a un estancamiento en el progreso de la población. Es decir, que las víctimas se han convertido para el gobierno colombiano en una carga, pues necesitan de la asistencia excesiva del Estado debido al conflicto armado, generando que no

se les reconozca como iguales y por ende no se tengan en cuenta sus intereses, necesidades ni derechos. Justamente por ello, el Estado hace uso de la biopolítica para evitar que esta población crezca y se convierta en mala raza, debilitando completamente la patrimonialización de la política y la democracia.

Dicho lo anterior, al ser el ideario neoconservador el que asume quiénes pueden hacer parte de la Nación, permite no considerar aquellos sujetos mencionados anteriormente como sujetos de derecho, , llevando a que todas estas técnicas o herramientas aplicadas a estos sectores de la población sean justificadas, pues para el ideario neoconservador , son proclives a la violencia, generando así lo que sería una "mala raza" en la población y por ende un mal ciudadano, buscando la normalización.

Al ser un gobierno que busca la normalización de aquella parte de la población considerada como una mala raza y sujetos sin derechos, el gobierno colombiano tiene como mecanismo la biopolítica, que hace referencia a “una tecnología del saber sobre el cuerpo en donde el mismo cuerpo del ciudadano se convierte útil en el momento en que se vuelve sometido” (Foucault M., 1976). La biopolítica se convierte en aquella herramienta utilizada para someter a los cuerpos ya sea de manera directa o indirecta, en algunos casos usando la violencia como estrategia para lograr la dominación por parte de las élites políticas y así convertir a la mala raza en los buenos ciudadanos o simplemente eliminarlos. Los asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, exclusión, etc. son tácticas que oculta el gobierno para atemorizar no solo a las víctimas, líderes sociales, defensores de derechos y aquellos que retan al Estado, sino a la población en general, así la biopolítica permitirá el adiestramiento para que sus comportamientos y acciones no vayan en contra de sus intereses, produciendo de tal manera una sociedad disciplinada. Por ende, lo que busca el ideario neoconservador por medio de la biopolítica es cambiar o modificar la conducta y estilo de vida de las víctimas ya que son personas vulnerables frente al Estado y así no vayan en contra de las tradiciones del gobierno.

A pesar de que en la constitución de Colombia de 1991 se manifiesta que se garantizan los derechos y la participación política de toda la sociedad, los gobiernos han venido generando prácticas de violencia contra la población colombiana. Demostrando así que se vive en un Estado donde no hay protección a la vida con tal de limitar sus acciones, con el fin de no debilitar su legitimidad y permanecer en el poder.

#### **IV. Seguridad y securitización: un repaso histórico.**

El concepto de seguridad desde el inicio de los tiempos ha movido y motivado a los individuos y posteriormente a los Estados a actuar en pro de la protección de sí mismos, la primera muestra de esto es el llamado “contrato social” retratado por Jean-Jacques Rousseau (1762), es aquí donde los hombres guiados por el temor de los unos a los otros y los peligros que representaba el estado de naturaleza, entregan de forma voluntaria el poder a una entidad creada con el único propósito de velar por el cumplimiento de dicho “contrato social”: El Estado. Durante dos siglos esta percepción no cambió mucho, pero posteriormente en el periodo comprendido entre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, el concepto de seguridad varió de tal forma que al día de hoy diversas escuelas de pensamiento siguen en desacuerdo respecto a qué es realmente la seguridad y cuál paradigma de las Relaciones Internacionales da mejor significado al mismo.

Durante la Primera Guerra Mundial el concepto de seguridad planteado por realistas como Hans Morgenthau que “brindaron a través de sus escritos una forma de analizar y entender el mundo a partir de la concepción del poder” (citado en Cujabante, 2009), esto quiere decir que el mundo era visto como un lugar total y completamente bélico, donde cada Estado propendía por la realización y búsqueda de sus intereses y preservación, además se contemplaba a los Estados como los únicos actores del Sistema Internacional, en ese orden de ideas el planteamiento central de los realistas apuntaba a la necesidad de adquirir el poder entendido como «el control del hombre sobre las mentes y las acciones de otros hombres» (Hans Morgenthau, 1960, citado en Cujabante, 2009), medio para conseguir el fin último por el cual fueron creados los Estados, y esta sería la causa continúa y latente de las disputas entre los mismos.

Posteriormente, en el periodo entre guerras creció a nivel mundial el paradigma Liberal (idealista) que planteaba la posible seguridad colectiva, esto implicaba la creación de una Organización Internacional a la cual los Estados entregarían parte de su soberanía con la esperanza de lograr una “paz” entre las naciones, dicha iniciativa se resquebrajó por causa de la imposibilidad de la Liga de Naciones por evitar la Segunda Guerra Mundial (Hoffman, 1987, citado en Cujabante, 2009), y es en este punto donde el tradicional concepto de seguridad permeado por la corriente realista resurge.

No obstante, para la década de los setenta Keohane y Nye plantean una nueva forma de entender el mundo y por ende la seguridad: la Interdependencia Compleja, el auge de la globalización y la aparición de diversos actores en el Sistema Internacionales fueron los síntomas de la necesidad de encontrar un nuevo eje articulador mundial, en este orden de ideas el poder y la estrategia militar perdieron el papel protagónico y dieron paso al concepto de Seguridad no solo como el fin de los Estados, sino también como el medio para lograr la búsqueda de objetivos comunes en un mundo anárquico. Esto se ve explicado en la creciente variedad de amenazas a la integridad y seguridad de los Estados, que trajo consigo la globalización, abriendo las puertas al desarrollo y a su vez ampliando el espectro de la ilegalidad que llegaría al punto de tocar muchas fronteras al mismo tiempo, y obligaría a los Estados a buscar el bienestar común, así como el propio.

En este orden de ideas, Barry Buzan y Ole Wæver serán fundamentales para la construcción del concepto de Securitización entendido como el “proceso discursivo a través del cual se construye un entendimiento intersubjetivo dentro de una comunidad política para tratar algo como una amenaza existencial para un objeto referente valioso, y para permitir un llamado a medidas urgentes y excepcionales para hacer frente a la amenaza” (Buzan y Wæver, 1998, citado en González y Sánchez, 2019), el cual nos permite teniendo en cuenta que cada individuo (Estado) tiene una perspectiva diferente de amenaza, construir mediante el discurso la seguridad. En otras palabras, el mundo está lleno de nuevas amenazas y actores, pero no implica que todos los Estados tengan el mismo tipo de amenazas, esto requiere que cada uno encuentre la forma de presentar ante el Sistema Internacional su amenaza como un tema de interés regional o global. La securitización de un tema específico puede provenir no sólo de agencias gubernamentales, los grupos de presión también pueden ejercer el papel de securitizadores y esta acción blindada de legitimidad las acciones adelantadas por los gobiernos en la búsqueda por acabar con esa situación o grupo de personas que ponen en peligro la estabilidad del Estado.

La evolución del concepto de seguridad y la aparición de la securitización explican el actuar del gobierno colombiano en las últimas décadas, donde el conflicto interno desangró al país y los gobernantes de turno solo buscaban posicionar a Colombia como un Estado problema dentro de la región, esto con el propósito de clasificar el conflicto armado interno como un problema potencial para la seguridad regional. El Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez es un

ejemplo de esto, ya que realizó diversas giras internacionales con el propósito de incluir a las FARC- EP dentro de la lista de grupos terroristas, con el fin de brindar mayor visibilidad y conseguir mayor apoyo económico a la lucha contra los grupos armados internos.

Por otro lado, el proceso de securitización del conflicto armado interno en Colombia ha sido llevado de diversas formas por los últimos tres presidentes de la República, en primer lugar el Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez securitizó el conflicto entorno a la guerra y la necesidad de acabar con el adversario por medios bélicos, posteriormente el Ex Presidente Juan Manuel Santos decidió llevar a cabo la securitización de la agenda colombiana en torno a la paz y una solución pacífica del conflicto, reconociendo así al grupo armado en cuestión como un igual, pero dicho intento por poner punto final al conflicto no fue muy bien recibido por un sector de la población quienes sentían que el proceso de paz no daba una justicia real a todas las víctimas del conflicto. Finalmente, el actual presidente de la República de Colombia Iván Duque Márquez no ha llevado por buen camino las promesas por medio de las cuales fue elegido: sacar adelante el proceso de paz, buscando equilibrar la justicia solicitada por las víctimas de tan cruel y desgarrador conflicto.

Lo anterior, refleja claramente como la securitización se ha convertido en una política de gobierno manipulada por la élite necons colombiana en la búsqueda del poder y de mantener la población separada y clasificada en aquellos, como decía Foucault, que deben hacer vivir y los que deben dejar morir.

## **V. Conclusiones.**

A partir de la colonia, la política Colombiana se ha caracterizado por un control y patrimonialización de la democracia por parte de las élites. Iniciando por los criollos, quienes se posicionaron como los héroes de la independencia con el único fin de asegurar su estatus político; pasando por una clase social alta que se apropió de la política del país con el fin de beneficiarse económicamente y protegerse del sistema judicial; hasta la actualidad, donde la patrimonialización ha quedado como herencia en las clases dirigentes, con el fin de reconceptualizar los significantes vacíos de la sociedad colombiana y generar una cadena de equivalencias que les permitiera quedarse en el poder.

Lo anterior se apoyó en una serie de métodos y estrategias, como la identificación del buen ciudadano por parte del neoconservadurismo, basándose en los lineamientos y valores planteados por una ideología conservadora del pasado y sustentado profundamente en los patrones coloniales. Así las cosas, se logra generar una división social en cuanto a quienes se configuran como una ventaja para el gobierno neoconservador (buen ciudadano) y quienes son una amenaza para su estabilidad (mal ciudadano).

De esta forma, el ideario neoconservador plantea quienes son parte de la nación y establece a ciertos grupos de personas como no aptos para ser sujetos plenos de derechos. Entre ellos los campesinos, los que buscan una política distinta y todos aquellos que el gobierno- y en ocasiones la misma sociedad adoctrinada por distintos grupos y pensamientos políticos- ha callado y ha sido suprimido de la esfera pública, para evitar un desequilibrio del statu quo.

Finalmente, hace falta una estrategia sólida para cambiar la metodología de gobierno, lo cual es posible únicamente si la sociedad colombiana reconceptualiza el poder para que esté en manos del pueblo. Puesto que, desde la independencia se ha forjado una cultura política que adoctrina a la población electoral a pensar de cierto modo, sin tomar en cuenta sus necesidades, permitiendo así que la política sea fuente de beneficio individual, e impidiendo beneficiar a la sociedad colombiana en su conjunto. Hace falta redefinir el buen ciudadano, como aquel que es capaz de poner en práctica un agonismo, por medio del cual se permite llevar una discusión política que reconozca al otro como igual con capacidad de dialogar y no como adversario, así generando una tolerancia frente a las visiones políticas, económicas y sociales, con el fin de configurar un gobierno y una sociedad que identifique los problemas y permita implementar la solución.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- ❑ Ayerbe, Luis Fernando. (2010). El ideario neoconservador en la política exterior de Estados Unidos. Presencia y permanencia.
- ❑ Buzan & Wæver. (2003). *Regions and Powers*. New York, Estados Unidos: Cambridge University Press.
- ❑ Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGNIDAD. Informe general Grupo de Memoria Histórica.

- ❑ Contreras, R. (2006). Los principios del modelo neoconservador de gobernabilidad aplicado en América Latina durante los 90.
- ❑ Cujabante, Ximena. (2009). LA SEGURIDAD INTERNACIONAL: EVOLUCIÓN DE UN CONCEPTO. (93-106).
- ❑ Mouffe, C. (1999), EL RETORNO DE LO POLÍTICO. Barcelona, España. Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- ❑ Mouffe, C. (2010). LA POLÍTICA Y EL AGONISMO. Rue Descartes. Colegio Internacional de Filosofía.
- ❑ Foucault, M. (2000). DEFENDER LA SOCIEDAD, curso en el Collège de France, 1976. Fondo de cultura económica de Argentina, S.A.
- ❑ Foucault, M. (1976). Vigilar y Castigar. México: Siglo Veintiuno Editores.
- ❑ Gómez, J. (2014). La conceptualización del racismo en Michel Foucault. Interdisciplina 2, número 4, pp. 121-142. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México.
- ❑ González y Sánchez. (2019). DEL GOBIERNO URIBE AL GOBIERNO SANTOS: UNA ANALÍTICA DESDE LA SECURITIZACIÓN Y DESECURITIZACIÓN DE LAS AGENDAS DE POLÍTICA EXTERIOR EN MATERIA DE SEGURIDAD.
- ❑ H-Diplo/ISSF Roundtable Review of Justin Vaïsse. Neoconservatism: The Biography of a Movement. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
- ❑ Indepaz. (2019). TODOS LOS NOMBRES, TODOS LOS ROSTROS: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LÍDERES/AS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS TERRITORIOS.
- ❑ Kristol, Irving. The Neoconservative Persuasion: Selected Essays, 1942-2009. (2011). Basic Books.
- ❑ Keohane R y Nye, J. Poder e Interdependencia. Buenos Aires: GEL, 1988, p. 41-54
- ❑ Orozco, Gabriel. (2006). El concepto de la seguridad en la Teoría de las Relaciones Internacionales.
- ❑ Sanmartín, I. (2008). LAS GUERRAS CULTURALES EN TORNO AL PENSAMIENTO ÚNICO, pp. 85-113. Universidad de Santiago de Compostela.
- ❑ Semillero de Justicia Transicional. 2016. LO QUE DEBE SABER SOBRE EL ACUERDO DE PAZ. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de la Sabana.
- ❑ Sisco y Chacón. Barry Buzan y la Teoría de los complejos de seguridad (2004).